

Señor

JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI

E. S. D.

Medio de control	Reparación Directa
Demandante	Fabian Esteban Yepes Castillo y otros
Demandado	Distrito Especial de Santiago de Cali
Llamada en garantía	Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. (coaseguro)
Radicación	76001-33-33-015-2024-00108-00

FANNY TRUJILLO RODRIGUEZ, mayor de edad y vecina de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía número 31.280.445 expedida en Cali, abogada titulada, con Tarjeta Profesional número 63.738 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderada judicial de la Sociedad **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.**, dentro de los términos legales, de manera respetuosa, mediante el presente documento procedo a contestar la demanda que dio origen al proceso de la referencia y el llamamiento en garantía formulado por el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, todo de acuerdo a lo siguiente:

Aseguradora Solidaria de Colombia O.C., Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. Chubb Seguros S.A. y AIG Colombia Seguros Generales S.A. como Compañía de Seguros y como entidades coaseguradoras del Distrito Especial de Santiago de Cali, no tienen la obligación asumir el pago de los perjuicios que pretenden los demandantes, pues estos **no** aportaron pruebas conducentes y pertinentes que demuestren los elementos que configuran la responsabilidad del Distrito de Santiago de Cali en el accidente en el que se vio involucrado la señora LORENA COLORADO NIEVAS, el pasado 31 de julio de 2022.

SUMARIO: I. Contestación a la demanda II. Contestación al llamamiento en garantía III. Solicitud de pruebas. IV. Notificaciones. V. Traslado de los alegatos a las demás partes.

I. CONTESTACION DE LA DEMANDA

Pronunciamiento respecto a los hechos:

FRENTE AL HECHO “1”: No me consta, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en el cual no tiene injerencia. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO “2”: No me consta, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en el cual no tiene injerencia. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO “3”: No me consta, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en el cual no tiene injerencia. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO “4”: No me consta, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en el cual no tiene injerencia. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

Respecto a la causa del accidente, es una apreciación subjetiva del apoderado de la parte demandante, la cual carece de valor, ya que se trata sobre el problema jurídico a resolver por el despacho judicial. Por consiguiente, no deberá ser tenida en cuenta.

Sobre el particular, es importante precisar que no existe Informe Policial de Accidente de Tránsito; solo se tiene la versión del actor FABIAN ESTEBAN YEPES CASTILLO, que no aporta como pruebas relevantes sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio el accidente.

FRENTE AL HECHO “5”: No me consta, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en el cual no tiene injerencia. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO “6”: No me consta, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en el cual no tiene injerencia. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO “7”: No me consta, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en el cual no tiene injerencia. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO “8”: No me consta, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en el cual no tiene injerencia. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO “9”: No me consta, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en el cual no tiene injerencia. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO “10”: No me consta, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en el cual no tiene injerencia. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO “11”: No me consta, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en el cual no tiene injerencia. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

Llama la atención que de forma temeraria el apoderado se inventa una pérdida de capacidad laboral para poder calcular los perjuicios, cuando realmente para argumentar la existencia del perjuicio se debe aportar la prueba correspondiente, esto es el dictamen de pérdida de capacidad laboral expedido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Así las cosas, no puede tomarse como cierto un hecho que parte de una estimación sin prueba alguna.

FRENTE AL HECHO “12”: No me consta, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en el cual no tiene injerencia. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO “13”: No me consta, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en el cual no tiene injerencia. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO “14”: No me consta, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en el cual no tiene injerencia. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

Pronunciamiento respecto a las pretensiones:

Me opongo a cada una de las pretensiones de la demanda, y respetuosamente solicito al señor Juez se absuelva a mi representada, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA y al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI. Lo anterior, teniendo en cuenta que la demanda carece de fundamentos fácticos y jurídicos que prosperen. Lo anterior, conforme no logra demostrar la configuración de los elementos de la responsabilidad estatal bajo ningún título de imputación, a saber:

1. Daño antijurídico: Entendido como aquel daño que la víctima no está en deber jurídico de soportar; lesione un derecho, bien o interés protegido legalmente por el ordenamiento; y que sea cierto.

2. La imputación: Que requiere abordar dos niveles, uno fáctico (atribución material, a través de la cual se determina el origen de un resultado que se adjudica a una acción u omisión) y otro jurídico (fundamento de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico)

No hubo acción y/o omisión por parte de Distrito de Santiago de Cali para que se configure responsabilidad a título de imputación de falla en el servicio y/u otro título de imputación.

Me pronunciaré frente a cada pretensión en los siguientes términos:

FRENTE A LA PRETENSIÓN 4.1.: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión, por cuanto no se demuestra por la parte demandante los elementos de la responsabilidad del Estado por la falla en el servicio ni otro título de imputación, a saber:

- Daño antijurídico: Entendido como aquel daño que la víctima no está en deber jurídico de soportar; lesione un derecho, bien o interés protegido legalmente por el ordenamiento; y que sea cierto.

- La imputación: Que requiere abordar dos niveles, uno fáctico (atribución material, a través de la cual se determina el origen de un resultado que se adjudica a

una acción u omisión) y otro jurídico (fundamento de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico)

El juicio de responsabilidad extracontractual del Estado tradicionalmente se ha estructurado mediante el estudio del daño, la imputación y el fundamento. No obstante, en postura reciente de la jurisprudencia contenciosa administrativa establece que el juicio de responsabilidad del Estado debe analizarse dos elementos: el daño antijurídico y la imputación.

El accidente en el que resultó lesionado el señor FABIAN ESTEBAN YEPES y los daños ocasionados, no le son imputables fáctica ni jurídicamente al Distrito Especial de Santiago de Cali, (por falla en el servicio) pues no se demuestra de manera conducente y pertinente que la acción u omisión de esta entidad haya ocasionado los daños.

FRENTA A LA PRETENSIÓN 4.2.: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión, por cuanto no se demuestra por la parte demandante los elementos de la responsabilidad del Estado por la falla en el servicio ni otro título de imputación. Me pronuncio en los siguientes términos:

FRENTA A LA PRETENSIÓN 4.3.: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión, por cuanto no se demuestra por la parte demandante los elementos de la responsabilidad del Estado por la falla en el servicio ni otro título de imputación. Me pronuncio en los siguientes términos:

No se ha aportado prueba alguna que demuestre de forma cierta y concreta que el señor Yepes venía generando ingresos regulares al momento del supuesto hecho, ni mucho menos que estos correspondieran al monto indicado. La carga de la prueba en materia de perjuicios corresponde a quien los alega, de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso. No puede pretenderse una indemnización basada únicamente en estimaciones hipotéticas o en simples afirmaciones sin respaldo probatorio.

Así mismo, no se aporta con la demanda dictamen que demuestre la Pérdida de Capacidad Laboral que permita cuantificar el presunto daño. La carga de la prueba en materia de perjuicios corresponde a quien los alega, de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso. No puede pretenderse una indemnización basada únicamente en estimaciones hipotéticas o en simples afirmaciones sin respaldo probatorio.

FRENTA A LA PRETENSIÓN 4.4.: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión, por cuanto no se demuestra por la parte demandante los elementos de la responsabilidad del Estado por la falla en el servicio ni otro título de imputación.

En cuanto al perjuicio moral, mencionado en el apartado de las pretensiones, es importante recordar que los perjuicios no pueden ser indemnizados basándose en presunciones. Debe haber certeza absoluta tanto en la calidad en la que se piden como en la causación del daño; de lo contrario, no será posible obtener una sentencia condenatoria o una declaración de responsabilidad, ya que esta no puede basarse en presunciones sin elementos probatorios que permitan concluir su certeza.

En este sentido, los perjuicios morales están tasados de indebida manera, los perjuicios morales están calculados al arbitrio de la parte demandante sin sustento alguno, desconociendo de paso la jurisprudencia del Consejo de Estado en la materia.

Me opongo a la prosperidad de los daños morales, toda vez que, de conformidad con el artículo 167 del Código General, aplicable por remisión del artículo 211 de la ley 1437 de 2011, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen” la parte demandante no acredita la congoja y la aflicción producidas. Aunque la pretensión no está dirigida de manera directa a mi representada, quien fue llamado en garantía al proceso, no se aportan pruebas suficientes que permitan establecer con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. Al no poder endilgarse responsabilidad a los demandados, menos podrá ser responsable mi representado, dentro de este proceso, toda vez, no existe sustento jurídico ni factico para proceder con todo lo solicitado.

FRENTA A LA PRETENSIÓN 4.5.: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión, por cuanto no se demuestra por la parte demandante los elementos de la responsabilidad del Estado por la falla en el servicio ni otro título de imputación.

Dicha figura exige prueba cualificada del deterioro efectivo y específico de las condiciones personales del afectado. En este caso, no obra peritaje ni prueba suficiente que justifique la cuantía pretendida o que establezca con claridad la relación con la conducta de los asegurados.

Aunque la jurisprudencia del Consejo de Estado ha aceptado en casos específicos la configuración del "daño a la vida de relación", lo ha hecho de manera excepcional, restrictiva y bajo criterios rigurosos de prueba. No se trata de un

perjuicio automático o presumido por la sola ocurrencia de una lesión personal.

La Sección Tercera del Consejo de Estado ha advertido que este daño no puede confundirse con el daño moral, ni puede ser una duplicación de los efectos naturales de una afectación física, pues su indemnización solo procede cuando se demuestra que la víctima ha perdido el acceso real, habitual y significativo a formas esenciales de su vida relacional, social, afectiva o familiar.

En el presente caso, la pretensión se funda en afirmaciones genéricas según las cuales el señor Fabián Esteban Yepes y su núcleo familiar ya no realizan actividades como salir a bailar, montar bicicleta, hacer deporte o tener reuniones familiares. Estas manifestaciones, aunque emocionalmente comprensibles, no configuran per se un daño indemnizable, pues no se trata de una pérdida extraordinaria o específica de acceso a la vida social, sino de una consecuencia natural de un proceso de recuperación por una lesión física.

Tampoco se acreditó que las personas allegadas a la víctima dependieran emocional, funcional o económicamente de dichas actividades, ni que exista una transformación estructural de la dinámica familiar o social que pueda calificarse como un menoscabo autónomo e indemnizable. No hay prueba pericial ni testimonio especializado que detalle el alcance concreto, duradero y cuantificable de dicha afectación en la vida de relación de los demandantes.

Se solicita la suma de \$130.000.000 para cada demandante, equivalentes a 100 SMMLV por este solo concepto, sin que exista un criterio técnico, un análisis psicosocial o un dictamen pericial que fundamente dicha cifra. La pretensión se basa exclusivamente en una estimación subjetiva que duplica el monto pedido por concepto de daño moral, incurriendo en una posible doble reparación por los mismos hechos, lo cual está prohibido por la jurisprudencia.

FRENTE A LA PRETENSIÓN 4.6.: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión, por cuanto no se demuestra por la parte demandante los elementos de la responsabilidad del Estado por la falla en el servicio ni otro título de imputación.

La pérdida de oportunidad es un concepto jurídico utilizado en casos donde no se puede determinar con certeza que el resultado deseado habría ocurrido de no ser por la acción u omisión de un tercero, pero sí existe una probabilidad razonable de que esto sucediera.

La Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Civil, ha establecido que la pérdida de oportunidad no implica indemnizar por el resultado final, sino por la

frustración de una probabilidad razonable y cierta de obtener dicho resultado. Para el reconocimiento de este daño se requiere la demostración de que existía una probabilidad significativa de obtener un beneficio o evitar un perjuicio.

Por la parte demandada no se demuestra la estructuración de ninguno de los elementos de la pérdida de oportunidad, a saber:

- Existencia de una oportunidad cierta y concreta: Es necesario demostrar que la oportunidad perdida no era meramente hipotética, sino que tenía un fundamento sólido. Esto puede probarse con documentos, contratos previos, o antecedentes relacionados.
- Relación de causalidad: Se debe acreditar que la acción u omisión imputada al demandado fue la causa de la pérdida de la oportunidad, aunque no sea necesario demostrar que este causó directamente el daño final.
- Probabilidad razonable del resultado esperado: La Corte exige que la probabilidad del resultado no sea ilusoria ni remota. Esto se evalúa con base en elementos objetivos, como estadísticas o estudios técnicos.

Ahora bien, respecto a la cuantificación de este daño, según la jurisprudencia, la indemnización debe corresponder al valor de la oportunidad perdida, no al resultado final. Esto implica calcular la probabilidad del éxito y reducir el monto indemnizatorio proporcionalmente.

FRENTA A LA PRETENSIÓN 4.7.: En la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente 28.804, ponencia de la magistrada Stella Conto Díaz, en la cual se unifica sobre el contenido del perjuicio “daño a la salud”, además de su dinámica en las lesiones temporales, se plantea que esta tipología es reconocida única y exclusivamente a la víctima directa. Sobre la acepción de “víctima directa” debe entenderse el sujeto “sufriente por un suceso traumático accidental o por el daño”, mientras que los indirectos son “aquellos que están cerca de ella, constituido por los familiares, que tienen que afrontar el dolor de sus seres queridos y readaptarse a la nueva situación.”

Respecto del alcance y contenido del perjuicio fisiológico o a la vida de relación, el H. Consejo de Estado ha hecho las siguientes precisiones:

- A partir de la sentencia proferida el 6 de mayo de 1993, el Consejo de Estado ha reconocido la existencia de una forma de perjuicio extrapatrimonial, distinto del moral, denominado- en éste y en otros fallos posteriores- perjuicio fisiológico o a la

vida de relación y se definió como "pérdida de la posibilidad de realizar... otras actividades vitales, que aunque no producen rendimiento patrimonial, hacen agradable la existencia".

- El 25 de septiembre de 1997, se precisó, con más claridad, el alcance del concepto mencionado. Se resalta que la expresión "perjuicio fisiológico" es más adecuado el concepto de perjuicio de placer. No obstante, es claro que no se renuncia finalmente la utilización de aquélla. Por lo demás, El Consejo de Estado ha seguido usando la expresión, asimilándola a la de daño a la vida de relación.

No todas las actividades que, como consecuencia del daño causado, se hacen difíciles o imposibles, tendrían que ser calificadas de placenteras. Puede tratarse de simples actividades rutinarias, que ya no pueden realizarse, o requieren de un esfuerzo excesivo. no se trata simplemente de la afectación sufrida por la persona en su relación con los seres que la rodean. Este perjuicio extrapatrimonial puede afectar muchos otros actos de su vida, aun los de carácter individual, pero externos, y su relación, en general, con las cosas del mundo. En efecto, se trata, en realidad, de un daño extrapatrimonial a la vida exterior.

Infortunadamente, antes las lesiones del señor Yepes, no es posible solicitar indemnización de este daño, pues este le corresponde exclusivamente a la víctima.

FRENTA A LA PRETENSIÓN 4.8.: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión, por cuanto no se demuestra por la parte demandante los elementos de la responsabilidad del Estado por la falla en el servicio ni otro título de imputación.

FRENTA A LA PRETENSIÓN 4.9.: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión, por cuanto no se demuestra por la parte demandante los elementos de la responsabilidad del Estado por la falla en el servicio ni otro título de imputación.

FRENTA A LA PRETENSIÓN 4.11 (SIC).: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión, por cuanto no se demuestra por la parte demandante los elementos de la responsabilidad del Estado por la falla en el servicio ni otro título de imputación.

Adicionalmente, el demandante solicita tanto la indexación de las sumas reclamadas como intereses moratorios. Es importante destacar que la acumulación de ambos conceptos resulta improcedente, ya que constituyen formas de compensar el daño derivado de la pérdida del valor adquisitivo del dinero.

La indexación tiene como finalidad preservar el valor real del dinero frente a la inflación, mientras que los intereses moratorios están destinados a sancionar el

incumplimiento y, en algunos casos, compensar el uso del dinero por parte del deudor. Condenar simultáneamente al pago de ambos conceptos generaría un enriquecimiento sin causa para el demandante.

Fundamentos de derecho

El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia de 1991, señala:

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.

Este artículo es el fundamento de la responsabilidad del Estado, en el cual se desprende los siguientes elementos:

- Daño antijurídico: Entendido como aquel daño que la víctima no está en deber jurídico de soportar; lesione un derecho, bien o interés protegido legalmente por el ordenamiento; y que sea cierto.
- La imputación: Que requiere abordar dos niveles, uno fáctico (atribución material, a través de la cual se determina el origen de un resultado que se adjudica a una acción u omisión) y otro jurídico (fundamento de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico)

Los que serán analizados en el caso concreto para llegar a la conclusión que no hay responsabilidad por los daños que se ocasionaron a los demandantes con ocasión al accidente en el que lesionado el señor FABIAN ESTEBAN YEPES.

Si bien es cierto, con ocasión al hecho ocurrido el 16 de octubre de 2023, hubo lesiones del señor FABIAN ESTEBAN YEPES., estos no son imputables al Distrito de Cali, pues desde el punto de vista de imputación fáctica, no se demuestra de manera suficiente que la caída haya sido ocasionada por una conducta atribuible por negligencia de la entidad asegurada por mi procurada.

No hay lugar a imputación de responsabilidad por Falla en el Servicio, por la primera porque por parte de Distrito de Cali no hubo acción o omisión que causara el daño.

Los elementos recaudados en el proceso evidencian que el accidente se produjo como consecuencia directa de la imprudencia e impericia de la propia del señor FABIAN ESTEBAN YEPES en la conducción de su motocicleta, al momento en que transitaba por la calle 10 entre carreras 32 y 33 (Autopista Sur Oriental), en horas de la madrugada (4:40 a.m.), sin que existiera interferencia alguna atribuible a la

administración. Sumado a que el accionante no cuenta ni siquiera con fotografías del lugar de los hechos.

El maletín vial anaranjado es un dispositivo de canalización o advertencia temporal, reconocido por el Manual de Señalización Vial de Colombia (Resolución 1885 de 2015). Se clasifica como un elemento auxiliar de seguridad, usualmente usado en zonas de obra o intervención vial.

Características técnicas:

- Color anaranjado intenso, diseñado para alta visibilidad.
- Material: PVC, polietileno u otro plástico resistente.
- Forma: prismática o trapezoidal, con base ancha para estabilidad.
- Tamaño promedio: 60–80 cm de alto, 40–60 cm de ancho.
- Tiene bandas reflectivas blancas o amarillas, exigidas por el Manual, para ser visibles en la noche con luz vehicular.
- Puede estar acompañado de luces intermitentes en zonas de poca visibilidad.

En ese sentido, es necesario tener en cuenta que, para el momento del accidente – aproximadamente las 4:30 a.m. del 16 de octubre de 2023– ya existía luz crepuscular en la ciudad de Cali, lo cual indica que no se trataba de una condición de oscuridad absoluta. Además, los motociclistas, por disposición expresa del Código Nacional de Tránsito, están obligados a circular con las luces encendidas en todo momento, lo cual incrementa sustancialmente la visibilidad de elementos reflectivos como los maletines viales. Desde el punto de vista técnico, estos dispositivos están justamente diseñados para reflejar la luz de los vehículos y advertir su presencia a los conductores.

Adicionalmente, el maletín en cuestión no corresponde a un objeto pequeño, inadvertido o irrelevante, sino que presenta dimensiones semejantes a las de un cono de tráfico o una barricada plástica, con una forma voluminosa, simétrica y estable sobre la superficie de rodadura. Su diseño busca precisamente llamar la atención del conductor, al punto que resulta visible incluso desde distancias moderadas y en condiciones climáticas poco favorables.

En cuanto a la esquivabilidad del objeto, debe tenerse presente que la vía en la que ocurrió el incidente es una calle urbana, donde la velocidad máxima permitida es de 50 km/h, y en caso de obra o cierre parcial, debe ser incluso inferior (entre 30 y 40

km/h). A estas velocidades, un conductor atento y diligente cuenta con el tiempo y el margen suficiente para detectar y esquivar un obstáculo visible y legalmente dispuesto, como lo sería un maletín vial debidamente instalado.

Por ello, en el evento en que el maletín se encontrara correctamente ubicado – circunstancia que no ha sido desvirtuada por el demandante–, el conductor tenía el deber legal y técnico de disminuir la velocidad, mantener una conducción atenta y adoptar maniobras de evasión o precaución, conforme al principio de autoprotección y responsabilidad vial.

Finalmente, es importante advertir que no se ha allegado al expediente prueba técnica alguna que permita determinar con claridad el punto de impacto, la trayectoria del vehículo o la posición precisa del maletín, como sí sería esperable en un Informe Técnico de Accidente de Tránsito. La versión de los hechos presentada por el demandante es subjetiva, unilateral y carente de corroboración técnica o testimonial objetiva. Tampoco se acreditó la existencia de maniobras evasivas, frenado brusco o pérdida de control en condiciones atribuibles a un defecto de visibilidad o señalización.

En consecuencia, esta parte sostiene que el maletín vial era visible, notorio y esquivable, y que el accidente obedeció a una posible imprudencia, exceso de velocidad o falta de atención por parte del conductor, lo cual excluye cualquier responsabilidad atribuible a los asegurados, y en consecuencia, a mi representada como aseguradora llamada en garantía.

De conformidad con el Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002), los conductores están obligados a ajustar su velocidad a las condiciones del entorno, a fin de evitar accidentes. En este caso, el tamaño del bache y las condiciones de visibilidad permiten inferir que, de haber conducido con diligencia, el accidente se habría podido evitar. Por tanto, no puede imputarse el hecho dañoso al Estado, dado que existían condiciones suficientes de previsibilidad y reacción.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha reiterado que cuando el accidente es producto de la conducta imprudente del afectado, se rompe el nexo causal necesario para imputar responsabilidad a la administración. En este caso, al existir condiciones razonables de visibilidad y un obstáculo previsible, el hecho dañoso se debe exclusivamente a la impericia o distracción del señor YEPES quien no actuó con la debida precaución al conducir en horas de la madrugada.

La culpa exclusiva de la víctima rompe el nexo causal y exonera de responsabilidad al Estado, de conformidad con reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual no hay lugar a imputación de responsabilidad cuando el daño es

atribuible exclusivamente a la conducta del afectado.

Debe recordarse que la conducción de vehículos automotores requiere de ciertas habilidades y de un deber objetivo de cuidado, lo que implica tener todos los sentidos atentos al momento de la conducción para poder evitar accidentes de tránsito. De lo anterior, podemos inferir que la conductora no estaba concentrado en su actividad.

Aunado a lo anterior, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en Sentencia 08001233100019980066301 (38432), Feb. 8/17, precisó que la demostración del mal estado de la vía no es, por sí sola, suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en caso de producirse un daño, pues esa prueba debe acompañarse de la acreditación del nexo causal entre este y la acción u omisión en que pudo haber incurrido la administración en su deber de mantenimiento de la malla vial.

Con base en lo anterior, se solicita que se niegue la pretensión indemnizatoria por cuanto no se configura ninguno de los elementos exigidos por el artículo 90 de la Constitución para estructurar la responsabilidad estatal, siendo evidente que el daño alegado fue causado por el comportamiento imprudente de la víctima, sin participación alguna del Estado.

Excepciones de mérito.

- **Falta de legitimidad en la Causa por pasiva**

Si bien es cierto, la parte demandante no aporta pruebas conducentes y pertinentes respecto a las circunstancias de modo y lugar de los hechos y tampoco respecto a imputación fáctica, si eventualmente el despacho judicial considera que hay daño antijurídico, deberá tener presente que no hay legitimidad en la causa por pasiva del Distrito Especial de Santiago de Cali, teniendo en cuenta lo siguiente:

De conformidad con lo manifestado por el Consejo de Estado en sentencia con fecha 17 de julio de 2015, la legitimación en la causa es una figura de derecho procesal que se refiere a la capacidad de las partes, de acuerdo con la ley, de formular o controvertir las pretensiones de una demanda... La legitimación en la causa puede ser activa, cuando se refiere a la capacidad que tiene una persona para demandar; o pasiva cuando tiene que ver con la capacidad para comparecer como demandado.

De lo anterior se colige que la legitimación en la causa por pasiva es entendida como la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las pretensiones

de la demanda, por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial, por lo que para poder predicar esta calidad es necesario probar la existencia de dicha relación. Por lo cual, no es dable condenar a una entidad sin existir elementos de juicio suficientes para ello, pues no se acredita la existencia de una relación jurídica-sustancial.

Por todo lo anterior, solicito a su señoría declarar probada la presente excepción.

- **Inexistencia de Responsabilidad: ausencia de los elementos que configuran la Responsabilidad del Estado**

El juicio de responsabilidad extracontractual del Estado tradicionalmente se ha estructurado mediante el estudio del daño, la imputación y el fundamento. No obstante, en postura reciente de la jurisprudencia contenciosa administrativa establece que el juicio de responsabilidad del Estado debe analizarse dos elementos, a saber:

- Daño antijurídico: Entendido como aquel daño que la víctima no está en deber jurídico de soportar; lesione un derecho, bien o interés protegido legalmente por el ordenamiento; y que sea cierto.
- La imputación: Que requiere abordar dos niveles, uno fáctico (atribución material, a través de la cual se determina el origen de un resultado que se adjudica a una acción u omisión) y otro jurídico (fundamento de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico)

El maletín vial anaranjado es un dispositivo de canalización o advertencia temporal, reconocido por el Manual de Señalización Vial de Colombia (Resolución 1885 de 2015). Se clasifica como un elemento auxiliar de seguridad, usualmente usado en zonas de obra o intervención vial.

Características técnicas:

- Color anaranjado intenso, diseñado para alta visibilidad.
- Material: PVC, polietileno u otro plástico resistente.
- Forma: prismática o trapezoidal, con base ancha para estabilidad.

- Tamaño promedio: 60–80 cm de alto, 40–60 cm de ancho.
- Tiene bandas reflectivas blancas o amarillas, exigidas por el Manual, para ser visibles en la noche con luz vehicular.
- Puede estar acompañado de luces intermitentes en zonas de poca visibilidad.

En ese sentido, es necesario tener en cuenta que, para el momento del accidente –aproximadamente las 4:30 a.m. del 16 de octubre de 2023– ya existía luz crepuscular en la ciudad de Cali, lo cual indica que no se trataba de una condición de oscuridad absoluta. Además, los motociclistas, por disposición expresa del Código Nacional de Tránsito, están obligados a circular con las luces encendidas en todo momento, lo cual incrementa sustancialmente la visibilidad de elementos reflectivos como los maletines viales. Desde el punto de vista técnico, estos dispositivos están justamente diseñados para reflejar la luz de los vehículos y advertir su presencia a los conductores.

Adicionalmente, el maletín en cuestión no corresponde a un objeto pequeño, inadvertido o irrelevante, sino que presenta dimensiones semejantes a las de un cono de tráfico o una barricada plástica, con una forma voluminosa, simétrica y estable sobre la superficie de rodadura. Su diseño busca precisamente llamar la atención del conductor, al punto que resulta visible incluso desde distancias moderadas y en condiciones climáticas poco favorables.

En cuanto a la esquivabilidad del objeto, debe tenerse presente que la vía en la que ocurrió el incidente es una calle urbana, donde la velocidad máxima permitida es de 50 km/h, y en caso de obra o cierre parcial, debe ser incluso inferior (entre 30 y 40 km/h). A estas velocidades, un conductor atento y diligente cuenta con el tiempo y el margen suficiente para detectar y esquivar un obstáculo visible y legalmente dispuesto, como lo sería un maletín vial debidamente instalado.

Por ello, en el evento en que el maletín se encontrara correctamente ubicado –circunstancia que no ha sido desvirtuada por el demandante–, el conductor tenía el deber legal y técnico de disminuir la velocidad, mantener una conducción atenta y adoptar maniobras de evasión o precaución, conforme al principio de autoprotección y responsabilidad vial.

Finalmente, es importante advertir que no se ha allegado al expediente prueba técnica alguna que permita determinar con claridad el punto de impacto, la trayectoria del vehículo o la posición precisa del maletín, como sí sería esperable en un Informe Técnico de Accidente de Tránsito. La versión de los hechos presentada por el demandante es subjetiva, unilateral y carente de corroboración técnica o

testimonial objetiva. Tampoco se acreditó la existencia de maniobras evasivas, frenado brusco o pérdida de control en condiciones atribuibles a un defecto de visibilidad o señalización.

En consecuencia, esta parte sostiene que el maletín vial era visible, notorio y esquivable, y que el accidente obedeció a una posible imprudencia, exceso de velocidad o falta de atención por parte del conductor, lo cual excluye cualquier responsabilidad atribuible a los asegurados, y en consecuencia, a mi representada como aseguradora llamada en garantía.

De conformidad con el Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002), los conductores están obligados a ajustar su velocidad a las condiciones del entorno, a fin de evitar accidentes. En este caso, el tamaño del bache y las condiciones de visibilidad permiten inferir que, de haber conducido con diligencia, el accidente se habría podido evitar. Por tanto, no puede imputarse el hecho dañoso al Estado, dado que existían condiciones suficientes de previsibilidad y reacción.

Por todo lo anterior, no se configuran los elementos de responsabilidad del Estado, por lo que solicito a su señoría declarar probada la presente excepción.

- **Culpa exclusiva de la víctima**

Frente al hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, debe estar demostrado que esta persona participó de manera directa y que fue causa eficiente en la producción del resultado o daño.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la culpa es la conducta reprochable de la víctima por violación del deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o habiéndolos previsto confiar imprudentemente en poder evitarlos; y reviste el carácter de culpa grave el comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, al paso que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio.

En este sentido, los demandantes al no demostrar la responsabilidad de la administración de forma pertinente y conducente, deja entrever que fueron los únicos causantes del siniestro.

- **Enriquecimiento sin justa causa**

El enriquecimiento sin causa se presenta en los casos en los que un patrimonio se ve incrementado a expensas de otro, sin que exista una causa jurídica para ello. En cuanto a los elementos materiales, podemos decir que son

tres:

- i) enriquecimiento de un patrimonio,
- ii) empobrecimiento de otro y
- iii) un origen común entre los dos.

Entonces, el enriquecimiento es un aumento en el patrimonio de una persona, lo cual debe ser a expensas del patrimonio de otro, para que se cumpla con los dos primeros elementos materiales. Por último, es necesario que exista un hecho común que permita identificar un punto de referencia entre el beneficio obtenido y el detrimento económico generado.

Los demandantes al pretender la indemnización de un presunto daño antijurídico se estarían enriqueciendo sin justa causa, pues no se aporta prueba conducente y pertinente de los daños que se pretenden indemnizar.

- **Indebida tasación de perjuicios**

Al respecto la corporación unificó en el 2014 sus criterios de indemnización de perjuicios morales en los eventos de lesiones personales. En esta providencia se trazaron unos parámetros de guía para la tasación del daño moral de acuerdo con actores como el porcentaje de incapacidad laboral que dejó la lesión y el grado de parentesco de los demandantes en relación con la víctima directa. No obstante, lo anterior, deberá demostrarse el vínculo emocional con el fin de tasar los perjuicios.

Respecto del lucro cesante reclamado por la parte accionante, es necesario advertir que no se aportó prueba idónea del ejercicio de una actividad económica que generara ingresos reales y comprobables al momento del accidente, ni evidencia contable, laboral o documental que acredite que el señor YEPES percibía ingresos regulares derivados de un vínculo contractual, actividad independiente o relación laboral formal.

El lucro cesante, como ha señalado de forma reiterada el Consejo de Estado, exige que se acredite un daño cierto y actual, y no simplemente hipotético, fundado en presunciones. De acuerdo con lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso, la carga de la prueba recae sobre quien alega el perjuicio, y en este caso no se acredita pérdida alguna de ingresos, ni se demuestra interrupción de la actividad productiva que justifique la compensación reclamada.

Adicionalmente, frente a la pretensión de lucro cesante futuro, no se allegó dictamen

de pérdida de capacidad laboral, expedido por autoridad competente (como la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez), ni certificado médico con validez técnico-legal que indique que el señor YEPES quedó impedido, de forma permanente o transitoria, para continuar ejerciendo su actividad laboral o económica en el futuro.

En consecuencia, no resulta procedente ordenar el pago de indemnización por lucro cesante (ni consolidado ni futuro), cuando:

- No se demostró que la víctima percibía ingresos al momento del accidente.
- No se probó que dejó de percibirlos.
- No existe evidencia de que esté imposibilitada para seguir generándolos.

Así las cosas, el lucro cesante reclamado carece de soporte probatorio suficiente y debe ser desestimado, conforme a lo establecido por la jurisprudencia nacional en materia de reparación integral, que exige prueba cierta del perjuicio y del nexo causal con el hecho dañoso, so pena de inadmitir indemnizaciones con fundamento meramente especulativo.

- **Innominada**

Esta excepción tiene su fundamento especial en el artículo 282 del Código General del proceso. Dice esta norma: “Resolución sobre excepciones. En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa que deberán alegarse en la contestación de la demanda”.

No todo lo que constituye excepción que pueda beneficiar al demandado se puede visibilizar desde el comienzo del proceso, por cuanto que éste, apenas empezando, no es susceptible de pronunciamientos de fondo. Es necesario que el proceso avance y a medida que lo haga, se vayan notando las coincidencias o contradicciones en las expresiones de las partes que lo componen.

Lo que sí vale desde el comienzo, es la sinceridad, seriedad y seguridad con que cada una de las partes use para plasmar sus hechos. y sus puntos de vista en torno de esos hechos, que a la postre pueden identificar una excepción, concepto éste con el cual o bajo el cual generalmente se expone un medio de defensa por parte del demandado.

En el fondo, pues, lo que interesa es que, a falta de titularidad y precisión gramatical del término, lo que vale, es que el demandado exprese tales circunstancias de hecho con las que el juez pueda llegar al convencimiento de que lo que se impone no es una condena, sino la absolución del demandado o, como en este caso, la plena exclusión del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI y de mi representada, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. por todas las razones aducidas en el presente escrito.

II. CONTESTACION AL LLAMAMIENTO EN GARANTIA A MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A

Pronunciamiento respecto a los hechos.

Teniendo en cuenta que mi representada MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. fue llamada en garantía por el Distrito de Santiago de Cali, procedemos a intervenir, pronunciándonos respecto al llamamiento en garantía.

FRENTE AL HECHO “1.”: Es cierto. La existencia del proceso judicial y el radicado señalado ha sido debidamente notificada a esta aseguradora mediante auto admisorio del llamamiento.

FRENTE AL HECHO “2.”: Es cierto. Esta es una transcripción objetiva de las pretensiones de la demanda y constituye el fundamento fáctico del llamamiento.

FRENTE AL HECHO “3.”: Es cierto que MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. participa como aseguradora en la póliza multicolectiva No. 1507223000670, con un 30% de participación en coaseguro, y que la vigencia del contrato abarca la fecha de ocurrencia del supuesto hecho dañoso (16 de octubre de 2023).

Sin embargo, el simple hecho de participación en la póliza no implica automáticamente la obligación de indemnizar, ya que el reconocimiento de cobertura por parte de MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A está condicionado a que:

- Se acredite de forma clara y suficiente la responsabilidad civil extracontractual imputable al asegurado.

- Se demuestre el nexo causal entre el daño y una acción u omisión atribuible al Distrito, y que dicha conducta esté dentro del marco del riesgo asegurado.
- El siniestro no se encuentre dentro de las exclusiones del condicionado general.
- Se respete el límite de cobertura y los deducibles establecidos en la póliza

FRENTE AL HECHO “4”: No es propiamente un hecho, corresponde al contenido y finalidad legal del llamamiento en garantía según lo establecido en el CPACA. No obstante, la obligación de MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S. de asumir la indemnización solo opera en caso de condena efectiva y probada contra el asegurado, que esté amparada por la póliza.

Pronunciamiento en cuanto a las pretensiones.

Pese a que en el presente caso no son procedentes las pretensiones de los demandantes, por cuanto no se demostró ni acreditó los elementos de la responsabilidad del Estado, en el eventual caso que el señor Juez condene al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, me opongo a la prosperidad del llamamiento en garantía.

Si bien es cierto que MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA hace parte del grupo de aseguradoras que integran la póliza colectiva de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1507223000670, expedida a favor del Distrito con vigencia entre el 1 de marzo y el 16 de noviembre de 2023, ello no implica por sí mismo la procedencia del llamamiento ni la obligación automática de indemnizar, por cuanto toda cobertura está sujeta al cumplimiento estricto de las condiciones, términos y límites pactados en el contrato de seguro.

La póliza opera bajo la modalidad de ocurrencia, lo que significa que solo serán amparados los hechos que se generen dentro de su vigencia, siempre que exista un hecho imputable al asegurado que cause un daño cierto, evaluable y jurídicamente atribuible dentro del régimen de responsabilidad civil extracontractual. En este caso, ni en la demanda principal ni en el llamamiento se ha acreditado —ni siquiera sumariamente— que los hechos estén amparados por la póliza, ni se ha demostrado que concurren los presupuestos para imputar responsabilidad directa al asegurado.

Además, el condicionado de la póliza establece expresamente que el asegurador no está obligado a indemnizar en ausencia de prueba clara del siniestro, del nexo

causal y de la responsabilidad del asegurado. En ese sentido, el hecho de que MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA participe en un 30% del coaseguro no implica, en ningún caso, solidaridad automática con el resto de las aseguradoras ni con el Distrito. La obligación de MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA se encuentra limitada al porcentaje de participación pactado y bajo los topes y deducibles aplicables, sin que pueda entenderse como una garantía directa ni total frente a los perjuicios que se llegaren a declarar en contra del asegurado.

Tampoco se ha verificado si el supuesto evento dañoso se encuentra excluido de cobertura, o si existen causales de exoneración como el hecho exclusivo de la víctima, de un tercero o la inexistencia de culpa del asegurado. Ninguno de estos elementos ha sido desarrollado con el rigor probatorio necesario, por lo que la activación del amparo contractual es, en esta etapa procesal, jurídicamente improcedente.

En consecuencia, me opongo a la pretensión en tanto resulta prematuro y carente de sustento jurídico imponer a esta aseguradora una obligación que no ha nacido ni ha sido jurídicamente reconocida, y que solo podrá ser exigible en la medida en que se demuestre plenamente que:

- El asegurado incurrió en responsabilidad civil extracontractual conforme a la ley.
- El hecho generador ocurrió dentro del giro ordinario de las actividades aseguradas.
- Se cumplieron todas las condiciones de asegurabilidad, límites, sublímites y deducibles.
- No se configuró ninguna causal de exclusión.

Por lo tanto, solicito al despacho no acceder a la pretensión de condena contra MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA, hasta tanto no se verifique debidamente el siniestro asegurado conforme a los términos del contrato.

Excepciones:

- **Sujeción a los términos, condiciones, amparos, límites y exclusiones de la póliza.**

La figura del llamamiento en garantía permite convocar en principio a una persona

diferente a las partes inicialmente trabadas en la relación procesal (demandante y demandado), con fundamento en una relación sustancial (por ministerio de la ley) o por virtud de una relación contractual, existente entre el llamante y el llamado para que éste, responda de acuerdo con ese vínculo jurídico, de modo que el demandado llamante se libre de los eventuales efectos adversos que pueda acarrearle el litigio.

En este caso específico, es procedente el llamado que se hace a MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. en virtud del contrato de seguro. No. 1507223000670, No obstante, en el proceso no se acreditó la materialización del riesgo asegurado.

Sin embargo, ante una eventual condena, el asegurador solo estará obligado a pagar conforme este establecido en la póliza, tal como lo establece el artículo 1079 del Código Comercio, que para mayor claridad, cito a continuación:

“ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA

SUMA ASEGURADA. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074.”

Por lo anterior, se deberá tener en cuenta que, en virtud del contrato de coaseguro, a mi representada le corresponderá asumir el 20.00% del riesgo, así como también deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

- a. Objeto
- b. Exclusiones
- c. Deducibles
- d. Limites asegurados por eventos

Cláusulas que se encuentran en las condiciones particulares y generales del contrato de seguro.

Dicho porcentaje de coaseguros aplican en las pólizas No. 1507223000670.

- **Ausencia de solidaridad entre coaseguradoras**

El coaseguro se encuentra regulado en el artículo 1095 del Código de Comercio, se

define entonces como aquel “en virtud del cual dos o más aseguradores, a petición del asegurado o con su aquiescencia previa, acuerdan distribuirse entre ellos

determinado seguro". Además, se indica que le es aplicable la normatividad referente al contrato de seguro.

Esta figura es definida así: "es la distribución horizontal o primaria de los riesgos. Mediante este sistema un conjunto de compañías, entre las cuales no median relaciones recíprocas de aseguramiento, asumen responsabilidades individuales con respecto a un mismo riesgo. Que haya o no haya entre ellas un acuerdo previo para asumir cada una, una cuota de responsabilidad total, es una circunstancia extraña a la naturaleza técnica del coaseguro, la distribución puede derivarse de la iniciativa del asegurado, que quiere hacer partícipes del mismo seguro a dos o más compañías, o tener origen en una de estas que, incapaz de asumir la responsabilidad total, y con la aquiescencia del interesado, propone a otras instituciones aseguradoras la repartición del riesgo" (Ossa G, 1988).

Las responsabilidades de los coaseguradores respecto del asegurado o beneficiario, para expresarlo en términos acordes con la más estricta juridicidad, son de carácter conjunto y no solidario, es decir, cada uno responde hasta concurrencia de su respectiva participación en el riesgo y la falencia o incapacidad que pueda afectar a alguno de ellos no acrece las responsabilidades de los demás participantes.

- **Inexistencia de responsabilidad solidaria entre el demandado DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI y MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA**

Como quiera que la razón para vincular a MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A, es la existencia del contrato de seguro suscrito entre esta con el DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, como coaseguradora de Mapfre Seguros Generales de Colombia, teniendo en cuenta que la compañía no participo ni intervino en los hechos que fundamentan la acción, no siendo posible que haya obligación solidaria, entendida esta como aquella con pluralidad de sujetos, que consiste en que existiendo varios deudores o acreedores de una prestación que, pudiendo ser divisible , se puede exigir a cada uno de los deudores o acreedores por el total de ella, de manera que el efectuado o recibido de uno de ellos, extingue toda la obligación respecto al resto.

Respecto a estas obligaciones el código civil colombiano establece:

ARTÍCULO 1568. En general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito.

Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum.

La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley.

- **Innominada**

Esta excepción tiene su fundamento especial en el artículo 282 del Código General del proceso. Dice esta norma: “Resolución sobre excepciones. En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa que deberán alegarse en la contestación de la demanda”.

No todo lo que constituye excepción que pueda beneficiar al demandado se puede visibilizar desde el comienzo del proceso, por cuanto que éste, apenas empezando, no es susceptible de pronunciamientos de fondo. Es necesario que el proceso avance y a medida que lo haga, se vayan notando las coincidencias o contradicciones en las expresiones de las partes que lo componen.

Lo que sí vale desde el comienzo, es la sinceridad, seriedad y seguridad con que cada una de las partes use para plasmar sus hechos. y sus puntos de vista en torno de esos hechos, que a la postre pueden identificar una excepción, concepto éste con el cual o bajo el cual generalmente se expone un medio de defensa por parte del demandado.

En el fondo, pues, lo que interesa es que, a falta de titularidad y precisión gramatical del término, lo que vale, es que el demandado exprese tales circunstancias de hecho con las que el juez pueda llegar al convencimiento de que lo que se impone no es una condena, sino la absolución del demandado o, como en este caso, la plena exclusión del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI por todas las razones aducidas en el presente escrito.

III. SOLICITUD DE PRUEBAS

Documentales:

- i. Pruebas aportadas por la partes demandadas y llamadas en garantía en sus contestaciones.

- ii. Sírvasse tener como prueba la Póliza de Seguro y sus condiciones generales.

Interrogatorio de parte:

- i. Sírvasse de decretar el interrogatorio a la parte demandante sobre los hechos que dan origen a la demanda.

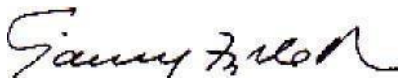
IV. NOTIFICACIONES

La suscrita apoderada judicial puede ser notificada en la CR 1 OESTE 1 A-30 APTO 801 en la ciudad de Cali. Correo electrónico: trujillo445@emcali.net.co y trujillorodriguezconsultores1@gmail.com. Teléfono: 3108434961.

V. TRASLADO DE LOS ALEGATOS A LAS DEMAS PARTES

En atención a lo dispuesto en la Ley 2213 de 2022, se remite el presente escrito en copia a las demás partes en el proceso.

De la Señora Juez, con todo respeto,



FANNY TRUJILLO RODRIGUEZ

Cédula de ciudadanía No. 31.280.445 de Cali

Tarjeta Profesional No. 63.738 del Consejo Superior de la Judicatura.